AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MADRID QUE POR TURNO CORRESPONDA

DOÑA VIRGINA ARAGÓN SEGURA, Procuradora de los Tribunales, Col. 1040, actuando en nombre y representación de **DÑA. ENCARNACIÓN MOYA NIETO**, representante general del PSOE para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de 2021, y del **PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)**, según acredito mediante copia de poderes procesales que acompaño como **DOCUMENTOS N.º UNO y DOS** y bajo la dirección técnica del letrado **DON ALBERTO CACHINERO CAPITÁN**, Col. 75379 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y **DON BERNABE GALLEGU DIAZ**, Col. 3161 del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho **DIGO**:

Que, mediante el presente escrito y al amparo de lo dispuesto en el **artículo 49** de la **Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General**, interpongo en tiempo y forma, **RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO** contra el **Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid, como Junta Electoral Autonómica, publicado el 8 de abril de 2021, en el BOCM N.º 83 (se adjunta como DOCUMENTO N.º 22), de proclamación de la candidatura del Partido Popular a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid convocadas por Decreto 15/2021, de 10 de marzo, a celebrar el 4 de mayo de 2021, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la inclusión como candidatos de D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL Y D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, por considerar el mismo no ajustado a derecho al incluir estos siendo inelegibles.**

El presente recurso tiene su base en los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

HECHOS

PRIMERO. - Por Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se convocaron elecciones a la Comunidad de Madrid a celebrar el 4 de mayo de 2021.

El Partido Socialista Obrero Español (en adelante, PSOE) mediante escrito presentado ante la Junta Electoral Provincial de Madrid, nombró Representante General de su candidatura a DÑA. ENCARNACION MOYA NIETO (se adjunta como **DOCUMENTO N.º TRES**, copia del nombramiento de Dña. Encarnación Moya Nieto ante la Junta Electoral Provincial de Madrid como representante general de la candidatura del PSOE para las elecciones de 4 mayo de 2021).

La Junta Electoral Provincial de Madrid mediante Acuerdo de 7 de abril de 2021 proclama la candidatura presentada por el PSOE para las elecciones de 4 de mayo 2021. (Se adjunta como **DOCUMENTO N.º CUATRO** Acuerdo de 7 de abril de proclamación de la candidatura del PSOE para las elecciones de 4 de mayo de 2021).

SEGUNDO. - El pasado día 2 de abril de 2021, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid N.º 78, se proclamaron de forma provisional las candidaturas que concurrentes a los comicios para la Asamblea de la Comunidad de Madrid a celebrar el próximo día 4 de mayo de 2021.

En la candidatura presentada por el Partido Popular (PP), (con el número 11 y que se puede encontrar en las páginas 23 y 24) se advierte la incorporación como candidatos, en el puesto número cinco, de **D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL** y en el puesto número veintitrés, de **D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN**.

Se acompaña como **DOCUMENTO N.º CINCO**, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid N.º 78.

TERCERO. - El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), conforme al artículo 47.2 de la LOREG, en tiempo y forma denunció ante la Junta Electoral Provincial de Madrid la inclusión en la candidatura del Partido Popular como candidatos del Sr. Cantó, y del Sr. Conde, por incumplimiento de las condiciones de elegibilidad exigidas por la normativa electoral (escritos de denuncia de la candidatura por la inclusión del Sr. Canto y el Sr. Conde que se acompañan como **DOCUMENTOS N.º SEIS y SIETE** presentados

ante la Junta Electoral Provincial de Madrid, DOCUMENTOS N.º OCHO y NUEVE, copia de emails de presentación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid los días 2 y 3 de abril de 2021)

En concreto, la inclusión de ambos candidatos siendo estos inelegibles, entendemos que suponen la infracción de los siguientes;

- **Artículos 2 y 3** de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid (LECM).
- **Artículos 7 y 10** de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (EAM).
- **Artículos 39, 46, y 47** de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).

E igualmente, entendemos se ven infringidos al menos los siguientes Acuerdos e Instrucciones de la Junta Electoral Central (JEC):

- **Acuerdo de 7 de abril de 1995.**
- **Acuerdo de 27 de abril de 1999.**
- **Acuerdo de 24 de mayo de 1995.**

Así, como su inclusión contradice también al menos la siguiente jurisprudencia del Tribunal Constitucional:

- **STC 86/2003, de 8 de mayo de 2003.**
- **STC 73/1987, de 23 de mayo de 1987.**
- **STC 154/1988, de 21 de julio.**

Finalmente, también vulnera preceptos básicos de la Constitución:

- **Artículo 9 CE.** Principios de legalidad, seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos
- **Artículo 14 CE.** Principio de igualdad.
- **Artículo 23 CE.** Derecho a participar en los asuntos públicos y Derecho de acceso a las funciones y cargos públicos en situación de igualdad.

CUARTO. - En nuestra denuncia exponíamos los siguientes hechos en relación con la candidatura del Señor. Cantó, por los cuales entendíamos que este debía ser

considerado inelegible al no reunir la condición de elector en la Comunidad de Madrid antes del 1 de enero de 2021:

El señor Cantó ha sido Coordinador autonómico de la formación política Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Diputado Autonómico de las Cortes Valencianas y portavoz del grupo parlamentario de la misma entidad política hasta su dimisión el pasado día 17 de marzo de 2021 (**DOCUMENTO N.º DIEZ**, se adjunta el acuerdo de la Mesa de las Cortes Valencianas tomando en consideración la renuncia del Sr. Cantó publicada en el BOCV número 155 de 01-04-2021), hecho público y notorio como recogieron todos los medios de comunicación. (**DOCUMENTO N.º ONCE** Noticia publicada en <https://valenciaplaza.com/toni-canto-formaliza-renuncia-escaños-corts>).

Por otro lado, los hechos concretos que conocemos y denunciemos, derivados de las propias declaraciones del Sr. Cantó a los medios de comunicación, en cuanto este admitió, tras su dimisión el 17 de marzo como Diputado de las Cortes Valencianas, a fecha de 25 de marzo de 2021, que llevaba empadronado en Madrid "*hace unos días para buscar trabajo*", tal y como recogen diferentes medios de comunicación, cuyos enlaces adjuntamos a continuación:

- *Toni Cantó asegura que se empadronó en Madrid "hace unos días para buscar trabajo" y la Junta Electoral decidirá si puede ser candidato.* ElDiario.es: https://www.eldiario.es/madrid/toni-canto-asegura-empadrono-madrid-dias-buscar-trabajo-junta-electoral-decidira-si-candidato_1_7345061.html (**DOCUMENTO N.º DOCE**).
- *Cantó sigue empadronado en Valencia y la Junta Electoral deberá avalar su candidatura.* El Confidencial: https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2021-03-25/canto-sigue-empadronado-en-valencia-y-sera-la-junta-electoral-deba-avalar-su-candidatura_3006484/ (**DOCUMENTO N.º TRECE**).

Por tanto, según estos hechos, además de la declaración pública de su cese como Diputado de las Cortes Valencianas del 17 de marzo de 2021, la condición de

empadronamiento en un municipio de la Comunidad de Madrid, que otorga la vecindad madrileña, y, por tanto, la condición de elector y elegible, no se habría producido, no sólo no antes del 1 de enero de 2021, sino una vez convocadas las elecciones después del 11 de marzo de 2020.

En consecuencia, el Sr. Cantó no podría reunir la condición de elegible para las elecciones del 4 de mayo de 2021, porque no puede ser elector en dichos comicios, al no ser vecino de la Comunidad de Madrid el 1 de enero de 2021, pues su empadronamiento, su residencia habitual, y su trabajo, hasta al menos el 17 de marzo de 2021 y, por tanto, su carácter de elector y elegible, correspondía en la Comunidad Valenciana.

Por tanto, nuestra denuncia se sustentaba en la creencia de la no condición de elector en la Comunidad de Madrid del Sr. Canto para las elecciones del 4 de mayo de 2021, que supone su carácter de inelegible, derivado de su no vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid, al menos hasta una fecha posterior al 17 de marzo de 2021.

QUINTO. - En nuestra denuncia exponíamos los siguientes hechos en relación con la candidatura del Señor. Conde por los cuales entendíamos que este debía ser considerado inelegible al no reunir la condición de elector en la Comunidad de Madrid antes del 1 de enero de 2021:

El Sr. Conde Bajén cuenta con una extensa carrera en política y, por ende, con un dilatado currículum en el que se acumulan diferentes cargos electos, todo ellos vinculados a la circunscripción de Toledo, con la que mantiene una intensa actual vinculación política, así como con la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, tal y como aparece en la página web del Partido Popular de esa Comunidad, donde ocupa diversos cargos orgánicos dentro del Partido. (**DOCUMENTO N.º CATORCE.** Captura de la pág. Web del PP en Castilla La Mancha, <http://www.ppclm.es/agustin-conde-bajen>). El Sr. Conde Bajén ha sido, entre muchos cargos, concejal (entre 1991 y 1999) y alcalde (entre 1995 y 1999) de Toledo, Senador por designación autonómica por la misma circunscripción (entre 1999 y 2011), así como Diputado en la Cámara Baja por la circunscripción de Toledo también (entre 2011 y 2016).

Por otro lado, tal y como recogen las siguientes noticias, el Sr. Conde Bajen ha sido contratado como asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, cuya sede se encuentra en Madrid, recientemente en enero de 2021, aunque en la publicación del nombramiento se indica que este se produce el 11 de diciembre de 2020 (**DOCUMENTO N.º QUINCE**, publicación del nombramiento como asesor del Sr. Conde en el BOCG de 26 de enero de 2021)

- *El PP ficha como asesor en el Congreso al “número dos” de Cospedal en Defensa.* Europa Press: <https://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-ficha-asesor-congreso-numero-dos-cospedal-defensa-20210126114942.html> (**DOCUMENTO N.º DIECISEIS**)
- *El PP ficha como asesor en el Congreso al Secretario de Estado de Defensa con Cospedal.* El Plural: https://www.elplural.com/politica/pp-ficha-asesor-congreso-secretario-defensa-cospedal_258142102 (**DOCUMENTO N.º DIECISIETE**).

Por tanto, sobre estos hechos, que acreditan una vinculación permanente y reciente con la Comunidad de Castilla La Mancha, a pesar de su reciente nombramiento, nuestra denuncia se sustentaba en la creencia de la no condición de elector en la Comunidad de Madrid del Sr. Conde para las elecciones del 4 de mayo de 2021, que supone su carácter de inelegible, derivado de entender que este mantiene o ha mantenido, por lo menos hasta una fecha muy reciente, al menos hasta enero de 2021, su vecindad administrativa en la Comunidad de Castilla La Mancha, no estando empadronado antes de esa fecha en la Comunidad de Madrid.

SEXTO.- La Junta Electoral Provincial de Madrid por Acuerdo N° 16 de 5 de abril recibido nuestro escrito de denuncia impugnando la proclamación de la candidatura del Partido Popular en el sentido de no proclamar candidato al Sr. Cantó ni al Sr. Conde por considerarlos inelegibles acordó, con falta de motivación, y sin entrar a los argumentos planteados en nuestros escritos sobre la causa de inelegibilidad de aquellos, atenerse al Acuerdo de subsanación de defectos relativo a la candidatura de Partido Popular adoptado el 3 de abril de 2021, del cual no se nos daba traslado, indicando: “*esta Junta*

ha acordado atenerse al acuerdo de subsanación de defectos relativa a la candidatura del Partido Popular adoptado el 3 de abril de 2021”, remitiéndonos a la interposición de este recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo de proclamación de la candidatura del Partido Popular, en su caso.

Se acompaña Acuerdo N°16 de la Junta Electoral Provincial de Madrid como **DOCUMENTO N.º DIECIOCHO.**

SÉPTIMO.- A la vista de la comunicación del Acuerdo N° 16, esta parte presentó ante la Junta Electoral Provincial escrito de petición de acceso y copia del expediente formado a raíz de nuestras denuncias respecto de la candidatura del Partido Popular, conforme a nuestro interés legítimo, conforme al artículo 47.2 de la LOREG, como denunciantes e interesados, en este expediente administrativo, y de cara la posible impugnación de la proclamación de la candidatura del PP, al considerar inelegibles a D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL y D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, ejerciendo el derecho reconocido en el art. 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, mediante el **DOCUMENTO N.º DIECINUEVE**, enviado a la Junta Electoral Central mediante correo electrónico el 5 de abril (**DOCUMENTO N.º VEINTE**) solicitamos el acceso y copia de los documentos que conformaban el expediente, en relación con nuestra impugnación y la candidatura del PP, en concreto, incluyendo la documentación aportada para justificar su carácter de elegibles, la documentación presentada para subsanar la candidatura, y el Acuerdo de subsanación de defectos relativa a la candidatura del Partido Popular adoptado el 3 de abril de 2021, del que no se nos había dado traslado.

OCTAVO. - La Junta Electoral Provincial contestó nuestro escrito de solicitud de acceso y copia de los expedientes administrativos mediante Acuerdo N° 17 de 6 de abril, en el que indica:

“1º. Con carácter previo a la presentación de candidatura, se remitió a todos los partidos concurrentes a este proceso electoral un listado de los requisitos que

debían cumplir todas las candidaturas, en el que se establecía que, si en el DNI de cada candidato no constaba su domicilio en la Comunidad de Madrid, deberían aportar volante de empadronamiento o certificado de empadronamiento.

2º. Presentadas las candidaturas, se dictó un acuerdo remitido a cada una de ellas poniendo de manifiesto los defectos para su subsanación, y respecto a los que no tenían domicilio en la Comunidad en su DNI se les ha solicitado volante o certificado de empadronamiento o certificación censal, de conformidad con los requisitos que establecen los arts. 2 y 4 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.

3º. En relación con los candidatos D. Antonio (Toni) Cantó García del Moral y D. Agustín Conde Bajén, ambos han aportado DNI en el que consta su domicilio en Madrid.

4º. En relación con la solicitud presentada por la Representante del PSOE de examinar la documentación de ambos candidatos, no existe por esta Junta ningún inconveniente para que comparezca en la sede de la junta y examine la documentación aportada por ambos candidatos siempre cumpliendo las normas establecidas en la Ley sobre Protección de Datos”.

Se acompaña Acuerdo N.º 17 de la Junta Electoral Provincial de Madrid como **DOCUMENTO N.º VEINTIUNO.**

NOVENO. - Personados en la Junta Electoral Provincial de Madrid el 7 de abril en presencia de esta se examinaron los DNI aportados por los Sres. Cantó y Conde, junto con la candidatura del Partido Popular.

Al no facilitarnos copia de la documentación del expediente, de memoria destacamos que comprobamos que efectivamente en los DNI aportados se indicaban sendos domicilios en la Comunidad de Madrid, en documentos expedidos el 26 y 29 de marzo de 2021, validos hasta el 26 y 29 de marzo de 2031.

Igualmente, se nos da informa del contenido del Acuerdo de 3 de abril de subsanación de la candidatura del Partido Popular en la que únicamente se hacía el requerimiento de certificación censal o empadronamiento a la candidata N.º 15, Dña. Alicia García Camacho, por haber presentado un DNI donde no constaba un domicilio en Madrid.

Solicitadas verbalmente las alegaciones del PP a nuestro escrito de denuncia de su candidatura por parte de la Junta no se nos permite conocer su contenido, remitiéndonos, en su caso, el corresponde procedimiento contencioso.

DÉCIMO. - Conforme a sus acuerdos N.º 16 y 17, la Junta Electoral Provincial de Madrid acordó proclamar la candidatura del PP incluyendo a los señores Cantó y Conde, publicándose la misma en el BOCM N.º 83 de 8 de abril de 2021 (**DOCUMENTO N.º VEINTIDOS**).

UNDÉCIMO. - Por todo lo anterior, habiéndose realizado la proclamación de la candidatura del Partido Popular para las elecciones del 4 de mayo de 2021 a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, considerando elegibles a D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL y D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, entendiéndose la misma no ajustada a derecho, al considerar que los mismo han de ser excluidos, por su carácter de inelegibles, interponemos este recurso contencioso administrativo en el plazo de los dos días siguientes a la proclamación definitiva de las candidaturas tras su publicación en el BOCM N.º 83 de 8 de abril de 2021.

A pesar de las alegaciones realizadas sobre la inelegibilidad de los candidatos del Partido Popular, por escritos presentados por esta parte en fecha 2 y 3 de abril de 2021, la Junta Electoral Provincial de Madrid acuerda en sus Resoluciones de 5 y 6 de abril desestimar nuestra denuncia y proclamar la candidatura con la inclusión de estos, remitiéndonos a interponer recurso contencioso ante los Juzgados de lo Contencioso en plazo de dos días contra el Acuerdo de la Junta de proclamación de la candidatura, publicado el 8 de abril, que venimos a interponer en este momento.

A los anteriores HECHOS son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. Jurídico-Procesales

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 49.1 y 2 de la ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General**, así como el **art. 8.5 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa**, respecto a los procedimientos sobre proclamación de candidaturas y candidatos, son competentes para la resolución del presente recurso los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo; correspondiendo por razones de competencia territorial, en relación a la Junta Electoral Provincial de Madrid como Junta Electoral Autonómica con su sede en el municipio de Madrid, a los Juzgado de lo Contencioso de Madrid, conforme al **art. 14 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa**.

SEGUNDO. - El presente recurso se interpone en el plazo de dos días previsto en el **artículo 49 de la citada LOREG**, desde la publicación en el BOCM N.º 83, de 8 de abril de 2021, sobre las Disposiciones de la Junta Electoral Provincial, por la que se proclaman definitivamente las candidaturas a las Elecciones a la Asamblea de Madrid convocadas por Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la Presidenta de Madrid.

TERCERO. - El procedimiento a seguir es el procedimiento previsto en el **art. 49 de la LOREG**, que prevé un procedimiento específico de impugnación de la proclamación de las candidaturas, con un carácter preferente y plazos muy breves.

B. Jurídico-Materiales

PRIMERO. - VULNERACIÓN DE LAS NORMAS PREVISTAS EN LA LEY 11/1986, DE 16 DE DICIEMBRE, ELECTORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (LECM) SOBRE LA CONDICIÓN DE ELECTOR Y ELEGIBLE PARA LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Los artículos 2 y 3 de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid, disponen sobre los derechos de sufragio activo y pasivo para las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid:

“Artículo 3 de la LECM:

*1. **Son elegibles los ciudadanos que, poseyendo la condición de elector, de conformidad con el artículo anterior, no se encuentren incurso en alguna de las siguientes causas de inelegibilidad.***

*2. **Son inelegibles [...].***

“Artículo 2 de la LECM:

*1. **El derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad, que gocen del mismo según el Régimen Electoral General y que, además, ostenten la condición política de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, conforme el artículo 7 de su Estatuto de Autonomía.***

*2. **Para su ejercicio es indispensable la inscripción en el censo electoral vigente.***

*3. **En las elecciones reguladas por la presente Ley regirá el Censo Electoral único referido al territorio de la Comunidad de Madrid”.***

Conforme a los citados preceptos resulta de manera expresa y sine qua non la condición de elector para ser elegible en los comicios autonómicos en la Comunidad de Madrid, ligando el ejercicio del derecho de sufragio pasivo a la necesidad al derecho de sufragio activo, y, la inscripción en el censo correspondiente y vigente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en sus artículos 2 y 6:

“Artículo 2 de la LOREG

1. *El derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad que no estén comprendidos en ninguno de los supuestos previstos en el artículo siguiente.*

2. *Para su ejercicio es indispensable la inscripción en el censo electoral vigente.”*

“Artículo 6 de la LOREG

1. *Son elegibles los españoles mayores de edad que, poseyendo la cualidad de elector, no se encuentren incurso en alguna de las siguientes causas de inelegibilidad:”*

Por tanto, de lo anterior, se concluye, que aquellos que no gocen de la condición de electores, no pueden ser elegibles, concurriendo en ellos causa de inelegibilidad, que debe dar lugar a su exclusión como candidatos.

SEGUNDO.- VULNERACIÓN DE LAS NORMAS PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA 3/1983, DE 25 DE FEBRERO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (EAM) SOBRE LA CONDICIÓN DE ELECTOR PARA LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA CONDICIÓN POLÍTICA DE CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN RELACIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL, Y LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DEL REAL DECRETO 1960/1986, DE 11 DE JULIO, POR EL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN Y DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LAS ENTIDADES LOCALES

Sentado lo anterior, establecido en los art. 2 y 3 de la LCM, siguiendo lo establecido en los art. 2 y 6 de la LOREG, debemos acudir derivada de la remisión normativa que realiza el art. 2 de la LCM al art. 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, para la determinar la consideración de electores respecto de aquellos que tienen la condición política de ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

“Artículo 7 del EAM:

1. Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid son los establecidos en la Constitución.

*2. A los efectos del presente Estatuto, **gozan de la condición política de ciudadanos de la Comunidad los españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de sus municipios**”.*

Señalando igualmente el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, respecto al carácter de elector y elegible:

“Artículo 10.8 de la EAM:

8. Serán electores y elegibles todos los madrileños mayores de dieciocho años de edad que estén en pleno goce de sus derechos políticos. La Comunidad Autónoma facilitará el ejercicio del derecho al voto a los madrileños que se encuentren fuera de la Comunidad de Madrid”.

Por tanto, de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, podemos concluir que el carácter de elector en la Comunidad, como condición necesaria para ser elegible, va ligado a la necesaria “vecindad administrativa en cualquiera de sus municipios” de la Comunidad de Madrid, de “acuerdo a las leyes generales del estado”.

Pues bien, para la determinación de la vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid, como en el resto del Estado, y como dispone el Estatuto en su remisión normativa debemos acudir a la normativa estatal sobre la cuestión, que aparece regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, concretamente en el precepto 15, por el cual se establece:

“Artículo 15

*Toda persona que viva en España **está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse en el que habite durante más tiempo al año.***

El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio.

Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio.”

La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.”

Además, los art. 54 y 55 del Real Decreto 1960/1986, de 11 de julio, por el que aprueba el Reglamento de Población y de demarcación Territorial de las entidades locales, se pronuncian en los mismos términos, consolidando así que la vecindad administrativa es equivalente al empadronamiento, y señalando que esta va ligada a la residencia habitual y sin que quepa tener más de una vecindad en el territorio español.

“Artículo 54

1. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

2. Los menores de edad no emancipados y los mayores incapacitados tendrán la misma vecindad que los padres que tengan su guarda o custodia o, en su defecto, de sus representantes legales, salvo autorización por escrito de éstos para residir en otro

municipio. En todo caso, respecto a los mayores incapacitados se estará a lo dispuesto en la legislación civil.

3. La inscripción en el padrón municipal de personas que residiendo en el municipio carezcan de domicilio en el mismo sólo se podrá llevar a cabo después de haber puesto el hecho en conocimiento de los servicios sociales competentes en el ámbito geográfico donde esa persona resida.

“Artículo 55

1. Son vecinos del municipio las personas que, residiendo habitualmente en el mismo, en los términos establecidos en el artículo 54.1 de este Reglamento, se encuentran inscritos en el padrón municipal.

La adquisición de la condición de vecino se produce desde el mismo momento de su inscripción en el padrón.

2. Sólo se puede ser vecino de un municipio.

3. El conjunto de vecinos constituye la población del municipio.”

De tal manera, que conforme a lo dispuesto en el art. 7 del ECM, y lo dispuesto en el art. 15 de la LBRL y en los art. 54 y 55 de la LBRL la vecindad administrativa que otorga la condición de ciudadano madrileño en plenitud de derechos, elector y elegible, viene determinada por el empadronamiento en un municipio de la Comunidad de Madrid.

Así, de lo dispuesto en estas normas, se concluye que tan solo se puede estar empadronado en un municipio, y, por tanto, en una Comunidad Autónoma, sin que quepa estar empadronado en más de uno ni en más de una Comunidad; de tal manera que mientras se está empadronado en un municipio, en otra comunidad, no se puede tener la vecindad administrativa en otra distinta.

E igualmente, de dicha normativa, dicha vecindad administrativa ligada al empadronamiento debe corresponder a aquel al lugar donde se reside más tiempo del año, no bastando tener una vivienda, en propiedad, en alquiler, residir temporalmente en la misma para el empadronamiento, o tener una vinculación familiar, laboral, profesional o afectiva.

En consecuencia, de la interpretación conjunta de las normas citadas en los párrafos anteriores, es claro que para ser elegible en la Comunidad de Madrid se debe reunir la condición de elector y, a su vez, para ostentar esta condición se deberá estar empadronado en alguno de los municipios de la Comunidad de Madrid, derivado de su residencia principal en este.

Por tanto, de lo anterior, se concluye, que aquellos que no gocen de la condición de electores, derivada su carencia de la condición de vecino madrileño ligado a su empadronamiento en un municipio de la Comunidad de Madrid, no pueden ser elegibles, concurriendo en ellos causa de inelegibilidad.

TERCERO. - VULNERACIÓN DE LAS NORMAS PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO (LOREG), EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN SU ART. 39, SOBRE EL CIERRE CENSAL, QUE ATRIBUYE LA CONDICIÓN DE ELECTOR Y ELEGIBLE.

Sentado lo anterior, debemos determinar desde cuándo se ha de reunir la condición de “vecindad administrativa” que da lugar a su inclusión en el censo electoral “vigente” de cara al proceso electoral convocado que se celebrará el 4 de mayo de 2021 en la Comunidad de Madrid.

Para determinar lo anterior, y en ausencia de norma en la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid, debemos acudir a la legislación electoral estatal, que conforme reconoce la misma en su Disposición Adicional Segunda, tiene una aplicación supletoria:

“Disposición Adicional Segunda de la LECM:

En lo no previsto en esta Ley será de aplicación lo dispuesto en el Título I de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con las adaptaciones que sean precisas, derivadas del carácter y ámbito de las Elecciones a la Asamblea de Madrid”.

Conforme a lo anterior, debemos tener en cuenta lo dispuesto sobre el cierre censal en la LOREG, en su artículo 39, bajo la siguiente redacción:

“Artículo 39 de la LOREG. Rectificación del Censo en período electoral.

*1. Para cada elección el Censo Electoral vigente será el cerrado **el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria.***

[...]

*3. Dentro del plazo anterior, cualquier persona podrá formular reclamación dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, **si bien solo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ninguna Sección del Censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello.** También serán atendidas las solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión en las copias del censo electoral que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral. **No serán tenidas en cuenta para la elección convocada las que reflejen un cambio de residencia de una circunscripción a otra, realizado con posterioridad a la fecha de cierre del censo para cada elección, debiendo ejercer su derecho en la sección correspondiente a su domicilio anterior”.***

Por consiguiente, habiéndose convocado las elecciones a la Comunidad de Madrid por Decreto de la Presidenta de la Comunidad con fecha 10 de marzo de 2021, **el cierre del censo electoral vigente para dicha convocatoria tuvo lugar el día 1 de enero de 2021.**

En consecuencia, la fecha que otorga la condición de elector, que da lugar a la inclusión en el censo electoral vigente, es el 1 de enero de 2021, y, por tanto, antes de esa fecha se debe reunir la condición de vecino de la comunidad de Madrid, a consecuencia del empadronamiento en uno de los municipios de esta.

Y conforme a lo anterior, solo aquellos electores que reúnan la condición de tales podrán ser elegibles, de forma que los candidatos antes de esa fecha deberían tener la condición de electores, ciudadanos madrileños, empadronados en un municipio de la comunidad de Madrid, con residencia principal en este.

Pero, es más la legislación electoral, precisa de modo claro, que, si a fecha de 1 de enero de 2021 no se había producido el cambio de empadronamiento, en el sentido de considerarse vecino madrileño, concurriendo los requisitos para ello, no se puede tener en cuenta ese cambio de empadronamiento posterior, realizado para el proceso electoral vigente, produciendo, en su caso, efectos para un proceso posterior, en el que efectivamente aquellos reunirán las condiciones de elector y elegible.

Por tanto, de lo anterior, se concluye, que aquellos que no gocen de la condición de electores, derivada su carencia de la condición de vecino madrileño ligado a su empadronamiento en un municipio de la Comunidad de Madrid, con anterioridad al 1 de enero de 2021, no pueden ser elegibles, pues no pueden ser incluidos en el censo de electores vigente para la convocatoria de elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid de 4 de mayo de 2021, concurriendo en ellos causa de inelegibilidad.

E igualmente, de lo anterior, se concluye, que los cambios de empadronamiento entre distintas circunscripciones electorales con fecha posterior al cierre censal del 1 de enero de 2021 no pueden considerarse de cara al proceso electoral en curso para las elecciones de 4 de mayo de 2021, sin que aquellos que, por tanto, no puedan reunir la condición de electores, puedan reunir la condición de elegibles, concurriendo en ellos causa de inelegibilidad.

CUARTO. - INAPLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ART. 4.2 DE LA LECM Y 7.2 DE LA LOREG EN RELACIÓN AL SUFRAGIO PASIVO

El artículo 4 de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid, concretamente en su apartado segundo, dice lo siguiente:

“Artículo 4.

1. La calificación de inelegible procederá respecto de quienes incurran en alguna de las causas mencionadas en el artículo anterior el mismo día de la presentación de su candidatura, o en cualquier momento posterior hasta la celebración de las elecciones.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior, los que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del Censo Electoral vigente, referido al territorio de la Comunidad de Madrid podrán serlo, siempre que con la solicitud acrediten, de modo fehaciente, que reúnen todas las condiciones exigidas para ello”.

Este artículo 4.2 de la LECM, recoge lo mismo que dispone el art. 7.2 de la LOREG:

“Artículo 7

1. La calificación de inelegible procederá respecto de quienes incurran en alguna de las causas mencionadas en el artículo anterior, el mismo día de la presentación de su candidatura, o en cualquier momento posterior hasta la celebración de las elecciones.

2. No obstante, lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior, los que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del censo electoral, podrán serlo, siempre que con la solicitud acrediten de modo fehaciente que reúnen todas las condiciones exigidas para ello.”

Por tanto, tanto la LOREG, como la LECM, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, y la JEC, como después expondremos, vienen a indicar un medio excepcional para aquellos que queriendo ejercer su derecho de sufragio pasivo no aparezcan en el censo electoral vigente, en el momento de la presentación de su candidatura.

Pues bien, lo que supone esta vía excepcional es permitir acreditar que aquel que no consta en el censo electoral “debía formar parte del mismo”, como indican ambas normas al señalar “siempre que acrediten de modo fehaciente que reúnen las condiciones exigidas para ello”, que son todas las que anteriormente hemos expuesto, y en el caso de un proceso electoral a la Asamblea de Madrid, tener la vecindad administrativa en un municipio de la Comunidad, derivada de su empadronamiento, con anterioridad al momento del cierre del censo electoral, 1 de enero de 2021.

Y ello, por cuanto, se admite en el caso de los candidatos, para ejercer su derecho de sufragio pasivo, que, aunque no consten en el censo electoral, y aunque no hayan seguido los procedimientos de impugnación del censo para su inclusión, establecidos en el artículo 39 de la LOREG, estos puedan ser considerados como tales, a los efectos de su consideración de elegibles, siempre que “acrediten de modo fehaciente que reúnen las condiciones exigidas para ello”.

Por tanto, el art. 4.2 de la LECM como no lo hace el 7.2 de la LOREG, no permite que puedan concurrir como elegibles a aquellos que no fueran electores, sino permite a aquellos electores que debían figurar en el censo, y que por un error de este no aparecen acrediten su derecho a estar en el mismo, aunque no hayan seguido los procedimientos de rectificación que se exige a los electores, por lo que, realizando una interpretación amplia del derecho **se permite ser elegible al que no podría ser elector por no aparecer en el censo electoral, pero siempre que se hubiera tenido derecho a estar en el mismo, o lo que es lo mismo, siempre que se reuniera la condición de elector.**

En consecuencia, en relación con el proceso electoral para la Asamblea de Madrid de 4 de mayo de 2021, se puede ser elegible, por tanto, aunque no se aparezca en el censo electoral, siempre que se reuniera la condición de elector con derecho a

estar en el censo, aunque no aparezca, antes del 1 de enero de 2021. Este es lo que se puede acreditar fehacientemente por vía del 4.2 de la LECM y el 7.2 de la LOREG.

De tal manera, que, si no se acredita fehacientemente que se reunían los requisitos para ser elector a fecha 1 de enero de 2021, no estando incluido en el censo electoral, aunque dicha circunstancia pueda concurrir en un momento posterior, aquellos candidatos han de ser considerados inelegibles.

El 4.2 de la LECM y el 7.2 de la LOREG, no permiten desligar la condición de elector de la elegible pues como exigen tanto la LECM como la LOREG, aquella es condición sine qua non de la condición de elegibilidad; por tanto, ni una norma ni otra permiten desligar la fecha de cierre censal y por tanto del momento en que se debe tener la condición de elector de la condición de elegible, como si esta se pudiera adquirir en un momento posterior. Y ello, por cuanto como dispone el art. 39 de la LOREG, y los acuerdos de la JEC, los cambios de residencia posteriores, acreditados mediante un nuevo empadronamiento, aunque acrediten una vecindad, no dan la condición de elector, ni por tanto, la de elegible para un proceso electoral en curso cerrado con anterioridad; ni tampoco basta con acreditar una vecindad anterior sino la del momento del cierre censal, cuando con anterioridad se estaba empadronado en otro municipio, y por tanto, se reunía la condición de elector y elegible en otra circunscripción y comunidad, pues no es posible ser a la vez vecino de dos Comunidades, como no lo puede ser vecino de dos municipios, y como no es posible formar parte de dos secciones ni circunscripciones electorales distintas.

Por lo tanto, el mero cambio de residencia después del cierre del censo no tiene efecto alguno para revestir a los candidatos de la condición de elector ni de elegible.

QUINTO. - VULNERACIÓN DE LOS REITERADOS ACUERDOS DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL SOBRE EL CIERRE CENSAL Y LOS EFECTOS DE LOS CAMBIOS DE DOMICILIO POSTERIORES

Los **Acuerdos de la Junta Electoral Central (Ac. de 7 de abril de 1995; 27 abril de 1999)** reflejan el criterio de la Administración electoral sobre la inadmisibilidad

de los cambios de residencia y adquisición de la condición de elector en la nueva circunscripción que se hayan producido una vez publicada la convocatoria electoral, expresando su criterio tal y como se recoge a continuación:

Acuerdo 167/1995, de la JEC de 7 de abril de 1995 (Se adjunta como **DOCUMENTO N.º VEINTITRES**):

“Comunicar que es criterio de esta Junta que, sin perjuicio de que la competencia para resolver dichas reclamaciones corresponda a la Oficina del Censo Electoral, cabría entenderse las reclamaciones efectivamente presentadas por los electores por cambios de residencia efectuados hasta la fecha de publicación de la convocatoria de las elecciones.”

Acuerdo 130/1999, de la JEC de 27 de abril de 1999 (Se adjunta como **DOCUMENTO N.º VEINTICUATRO**):

“1º. El censo electoral vigente para las elecciones municipales convocadas para el día 13 de junio es el cerrado el día primero de marzo de 1999 con las rectificaciones que resulten del proceso previsto en el artículo 39 de la LOREG.

2º. Esta Junta Electoral Central acordó el 17 de abril de 1991 y el 7 de abril de 1995 que deben aceptarse las reclamaciones por cambio de domicilio a municipios distintos del que figura en el censo vigente para las elecciones dado que estas reclamaciones afectan al contenido esencial del derecho de sufragio activo, siempre que el cambio de domicilio fuese anterior a la fecha de publicación de convocatoria (20 de abril).”

El **Acuerdo de 24 de mayo de 1995** estableció que quienes no efectúen la reclamación de cambio de domicilio dentro del plazo fijado por la LOREG deberán ejercer su derecho de sufragio en el anterior domicilio (Se adjunta como **DOCUMENTO N.º VEINTICINCO**):

Acuerdo 700/1995, de la JEC de 24 de mayo de 1995:

“Trasladar que habrán de ejercer el derecho de sufragio en el anterior domicilio, toda vez que no formularon en el plazo abierto al efecto oportuno reclamación contra la omisión de la inscripción de las listas del censo, expuestas al público. No cabe, por lo demás, en el supuesto planteado la expedición de certificación censal específica”.

Como vemos, en sus acuerdos la JEC incluso admite los cambios anteriores hasta la “fecha de la publicación de la convocatoria electoral”, nunca con posterioridad, pero a consecuencia de su doctrina a partir de 30 enero 2011 se modificó el artículo 39 para regular estas situaciones conforme a la redacción actual que ya indica “hasta la fecha de cierre del censo para cada elección”, redactado por el apartado diecisiete del artículo único de la L.O. 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General («B.O.E.» 29 enero).

SEXTO. – VULNERACIÓN DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL REQUISITO DE LA INSCRIPCIÓN CENSAL COMO REQUISITO DE ELEGIBILIDAD, LIGANDO EL CARÁCTER DE ELEGIBLE AL DE ELECTOR, Y, EN RELACIÓN CON EL ART. 7.2 DE LA LOREG, Y AL ART. 23 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en casos similares, en relación al requisito de la inscripción censal como requisito de elegibilidad, ligando el carácter de elegible al de elector, y, en relación al art. 7.2 de la LOREG, y la posibilidad extraordinaria prevista de acreditación de su derecho a formar parte del censo de cualquier modo fehaciente, siempre que se reunieran las condiciones para ello, y por un error no se aparezca en el mismo.

En concreto, por lo que respecta a la inscripción censal como requisito para el ejercicio del derecho sufragio pasivo del art. 23.2 de la CE el Tribunal Constitucional ha reiterado que como derecho de configuración legal (condicionado su ejercicio a “los requisitos que señalan las leyes”, STC 287/1994, de 27 de octubre), sólo los requisitos

que vulnera su contenido esencial resultarían constitucionales, sin que pueda ser considerado como tal el requisito de la inscripción en el censo, como se pronunció la Sala Primera en su Sentencia **STC 86/2003, de 8 de mayo de 2003**, en el recurso de amparo electoral 2602-2003 (Se adjunta como **DOCUMENTO N.º VEINTISEIS**):

En el FJ 4º de dicha resolución, el Tribunal acude al **artículo 23.2 de la Constitución española para considerar constitucional que las leyes exijan requisitos de elegibilidad de los candidatos, tal como estar inscrito en el censo electoral**. Y esto es así porque es el propio precepto constitucional el que remite expresamente a «**los requisitos que señalen las leyes**».

4. A estas razones, el recurrente en amparo contrapone diversos argumentos. Comenzando por los de más aparente entidad constitucional, sostiene que la exigencia de la inscripción en el censo electoral supondría establecer un requisito para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo que no dispone la Constitución, la cual sólo exige, con carácter general para todo proceso electoral, tener mayoría de edad, ser español y estar en posesión de los derechos políticos, argumento obviamente inadmisibles, tanto por su inexactitud (en rigor ni la mayoría de edad ni la posesión de derechos políticos son requisitos exigidos expresamente por la norma fundamental, y la nacionalidad admite la excepción que se establece en el art. 13.2 de la misma) como, sobre todo, claro está, porque el propio art. 23.2 CE condiciona el derecho fundamental que garantiza a «los requisitos que señalen las leyes», lo que ha dado lugar a la reiterada calificación del mismo por la doctrina de este Tribunal de derecho de configuración legal (por todas, STC 287/1994, de 27 de octubre, FJ 3 y las en ella citadas). En virtud de ello, **solamente si el legislador impone requisitos que vulneren el contenido esencial de dicho derecho, resultarían éstos inconstitucionales ex art. 53.1 CE, lo que no parece que ocurra precisamente con la exigencia de la inscripción en el censo, que este Tribunal ha considerado esencial** en alguno de sus pronunciamientos (así, la propia STC 73/1987, de 23 de mayo, FJ 3, citada por la resolución contencioso-administrativa aquí impugnada, o la STC 154/1988, de 21 de julio, FJ 3).

Continúa el Alto Tribunal sosteniendo que tampoco se vulnera la igualdad de todos los españoles ante la Ley el hecho de impedir que un ciudadano pueda presentarse en uno u otro lugar del territorio español, pues las comunidades autónomas pueden en sus legislaciones añadir otros requisitos siempre que no concurran causas de desigualdad en todas las personas a las que debería afectar esa Ley dentro de su territorio:

De igual modo, tampoco es aceptable el argumento de que tal exigencia para los candidatos que se presenten a las elecciones a las que pretende concurrir el aquí excluido, que son elecciones autonómicas, quiebra la igualdad de condiciones de todos los españoles para acceder a los cargos públicos representativos, porque todos los ciudadanos deben estar sometidos a los mismos requisitos sin más diferenciaciones –según sostiene la actora– que las que sean consecuencia de una situación desigual de partida, supuesto éste que únicamente se daría con la exigencia de pertenecer a la Comunidad Autónoma convocante de las elecciones, esto es, tener su ciudadanía política. De nuevo ha de recordarse la naturaleza de derecho de configuración legal del contenido del art. 23.2 CE y, tratándose de Comunidades Autónomas, cuyas legislaciones electorales deben observar, en virtud de la disposición adicional primera, apartado 2 LOREG, los requisitos que para el sufragio activo y pasivo contiene la regulación del régimen electoral general en sus capítulos primero y segundo del título I, nada obsta para que, en principio, y en tanto no suponga vulneración del contenido esencial del derecho a ser elegido tal y como antes se señalaba, añada la legislación autonómica otros requisitos para el ejercicio de dichos derechos. En principio, según decimos, entre ellos podría encontrarse el de la inscripción censal para concurrir a las consultas electorales.

Acaba el Fundamento Jurídico que hemos desglosado, indicando la obligatoriedad de inscripción en el censo electoral para todas aquellas personas que concurran a las elecciones como candidatos para las elecciones autonómicas;

Conecta con lo que se acaba de decir un tercer argumento aducido por la actora a favor de su tesis, consistente en lo que dispone la Instrucción de la Junta Electoral Central de 15 de marzo de 1999, dictada como consecuencia de la

reforma que supuso el Código penal de 1995 en relación con la desaparición de las penas afectantes al derecho de sufragio activo y pasivo y su incidencia en el censo. Dicha Instrucción establece en su norma primera, apartado 2, ciertamente, como recuerda el recurrente, que «La inscripción en el censo o en el padrón municipal de habitantes, de los ciudadanos españoles, no es condición necesaria para ser candidato, por lo que pueden ser proclamados candidatos los ciudadanos españoles que no figuren incluidos en las listas del censo electoral o en el padrón municipal de habitantes, siempre que aporten los documentos antes referidos» (documentos que son fotocopia del documento de identidad, y declaración jurada de no estar sujeto a penas que le inhabiliten para ser candidato, no estar incurso en causa de inelegibilidad y aceptar la candidatura por la formación política que le presente). Tal disposición se reitera, por cierto, aunque no lo reseñe la actora, en la Instrucción de la misma Junta Electoral Central de 20 de enero de 2000 para las elecciones generales. Ahora bien, con independencia del efecto que a tal Instrucción pueda otorgarse en el caso, según se dirá después, no es menos cierto que la misma se refiere a los candidatos españoles a los comicios municipales y al Parlamento Europeo, mientras que a los no españoles se les exige taxativamente tal inscripción en el censo (norma segunda 3). Y, sobre todo, en lo que aquí interesa, la norma tercera y última de dicha Instrucción establece que «En relación con las elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, las Juntas Electorales competentes se atenderán, en cuanto a la exigencia de que los candidatos no estén sujetos a penas que les inhabiliten para el acceso al correspondiente cargo electivo, a lo previsto al respecto en la Norma primera de la presente Instrucción, sin perjuicio de lo que en cada elección a Asamblea Legislativa resulte exigible», inciso este último del que acaso cabe inferir la posibilidad de exigencia de inscripción en el censo electoral a quienes pretendan formar parte de dichos cuerpos legislativos.

El FJ 7º entra a valorar la diferencia entre en sufragio pasivo y activo, para dotar de más protección si cabe al sufragio pasivo por el derecho democrático a poder ser elegido y concurrir a unas elecciones. A este respecto, el TC hace una profunda valoración sobre la actitud del candidato para reunir este requisito. En el caso concreto que aborda el recurso, se trata de establecer si el candidato ha sido diligente en mantener actualizados sus requisitos para concurrir, y acaba justificando el TC que nada podía hacer sospechar al candidato que no estaba incluido en el censo electoral cuando

había concurrido a todos los comicios desde 1996, por lo que se aprecia un mal funcionamiento de la Administración electoral. Cosa radicalmente distinta es cuando es el candidato el que tuvo que desarrollar una conducta activa y consciente para empadronarse y ser elector de dicha circunscripción, y así poder concurrir a las elecciones autonómicas de dicho territorio, y no lo hizo. Es decir, en ese caso, no existe funcionamiento anormal de la Administración, sino que es él quien, de manera consciente y deliberada, era hasta ese momento elector de otra Comunidad Autónoma.

7. Tratándose, sin embargo, del sufragio pasivo, la cuestión aparece notoriamente distinta, pues es obvio que, por muchos que sean los candidatos que pretendan concurrir a las elecciones por los distintos partidos, coaliciones o agrupaciones de electores, las normativas electorales (tanto la del régimen electoral general como la de los regímenes autonómicos) prevén un entramado de órganos administrativo-electorales, entre otras motivos, con el fin de posibilitar un control ad casum de los requisitos que deben reunir aquéllos para poder ser considerados elegibles. Es bien revelador en este sentido que, respecto de la vertiente pasiva del derecho de sufragio, no prevé la Ley Orgánica del régimen electoral general la posibilidad de certificación censal específica antes vista para el ejercicio del sufragio activo. Ello parece abocar a interpretar como necesariamente equivalente a tal posibilidad la previsión del art. 7.2 de dicho cuerpo legal y sus correlativos en prácticamente todas las legislaciones electorales autonómicas, so pena, en caso contrario, de tener que concluir que el derecho de sufragio pasivo no admite modo de subsanación en el supuesto de error censal inadvertido por su titular, conclusión que aparece de todo punto inadmisibles respecto de un derecho en el que se fundamenta el sistema democrático. Cosa del todo distinta es –y con ello se enlaza con la segunda cuestión antes planteada– la incidencia de la concreta actitud de quien pretende ser elegido ante la inexistencia de su inscripción censal, esto es, su diligencia o la falta de ella para acreditar lo que persigue la exigencia de la misma, que es demostrar que se reúnen los requisitos para poder ser elegible.

La obligatoriedad de la inscripción censal para ejercer el derecho de sufragio pasivo es también recogido por la **STC 73/1987, de 23 de mayo de 1987** fijando su doctrina en el FJ 3º:

3. Esta resolución, por último, no menoscabó el derecho del actor reconocido en el art. 23.2 de la Constitución al disponer que, por no haber aportado el señor Cáliz Adamuz la certificación de su inscripción en el censo electoral, no procedía su proclamación como candidato. Al proceder así, la Junta Electoral de Zona no hizo sino adoptar el Acuerdo debido en virtud de lo dispuesto en el art. 47.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, por referencia a lo exigido en los arts. 46.2, 6.1 y 2.2 de la misma Ley Orgánica, pues si el primero de los preceptos citados prescribe que no procederá la proclamación de candidatos que incumplan los requisitos señalados en la propia Ley -luego de haberse abierto, en su caso, el correspondiente plazo de subsanación- las demás disposiciones mencionadas establecen, sin sombra de duda, que quienes sean propuestos como candidatos habrán de acreditar, en el acto mismo de la presentación, su correspondiente inscripción censual.

En el mismo sentido de obligatoriedad de inscripción en el censo, se pronuncia la **Sentencia número 154/1988, de 21 de julio**, que establece en su FJ 3º que:

3. A este respecto debe ponerse ante todo de manifiesto la conexión inescindible existente entre el derecho fundamental de sufragio y la inscripción censal, pues, dado que sólo tendrán la condición de electores, y podrán ser elegibles, los ciudadanos que figuren inscritos en el censo -y así lo reconoce la Ley vasca (arts. 2 y 4)-, la inclusión en éste constituye un requisito indispensable para el ejercicio del derecho de sufragio. Es cierto que se trata de dos derechos de naturaleza distinta -la inscripción censal es de naturaleza declarativa de la titularidad del derecho de voto y no constitutiva de la misma-, pero no existe un derecho a tal inscripción separado del de sufragio, y éste comprende el de ser inscrito en el censo. Por ello resulta perfectamente congruente con la protección especial que la Constitución dispensa al derecho fundamental proclamado en su art. 23.1, que el art. 38.4 de la vigente Ley Orgánica electoral disponga la aplicación del procedimiento preferente y sumario previsto en el art. 53.2 C.E. a los recursos jurisdiccionales que se deduzcan frente a las decisiones de la Oficina del Censo Electoral, fuera del período electoral, en materia de listas electorales. Y que quepa también, por la vía configurada en el art. 43 de la LOTC, recurso de amparo frente a una exclusión indebida en las mencionadas listas, del mismo

modo que respecto al sufragio pasivo aparece expresamente previsto en el art. 49 de aquella Ley Orgánica electoral.

Dada la relevancia de la inscripción censal en el ejercicio del derecho fundamental de sufragio, el censo se convierte así en un instrumento indispensable para dicho ejercicio.

De lo anterior se deduce que la Comunidad Autónoma, al ejercer su competencia en materia electoral, ha de tener presente, en primer término, las normas estatales de desarrollo del derecho de sufragio reconocido en el art. 23 de la Constitución, así como las que regulan las condiciones básicas que garanticen la igualdad en su ejercicio, dictadas por el Estado en virtud del art. 149.1.1 de la Norma fundamental.

También el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con relación a la constitucionalidad sobre la exigencia de poseer vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la comunidad autónoma como requisito de elegibilidad en las elecciones autonómicas. Así, la diferenciación que se introduce entre los *ciudadanos* de una determinada comunidad autónoma y el resto de españoles para ser electores y elegibles en su elecciones autonómicas es acorde a los artículos 14 y 23.2 CE, como señaló el Tribunal Constitucional para las elecciones a la Asamblea de Extremadura, en su Sentencia 60/1987, 20 de mayo, indicando en su FJ Segundo que esa condición persigue “*procurar una cierta homogeneidad de intereses en el ámbito de la Comunidad Autónoma entre el Cuerpo Electoral y aquellos que ante él se proponen como candidatos*”. Doctrina constitucional pacífica y reiterada sobre la constitucionalidad de la exigencia de vecindad administrativa para concurrir como candidato a unas elecciones autonómicas, en la Sentencia 109/1990, de 7 de junio, en este caso con relación a la Ley electoral de Andalucía, y en la sentencia STC 107/1990, de 6 de junio.

Por otro lado, y consecuentemente, también se ha pronunciado la doctrina del Tribunal Constitucional en la interpretación del artículo 7.2 de la LOREG en relación con el artículo 23.2 de la Constitución en sentencias como la STC 144/1999, de 22 de julio o, con referencia a esta sentencia, la más reciente y ya citada STC 86/2003, de 8 de mayo.

En la doctrina relatada el Tribunal Constitucional se hace una protección reforzada sobre los requisitos que deben cumplirse y cómo documentarse para considerarse elector y poder ser acreedor del derecho de sufragio pasivo, haciendo que prevalezca el derecho a subsanar los posibles defectos formales que puedan ocasionarse al momento de la presentación del candidato, ya que se está regulando un derecho fundamental como es el de participación política. Al respecto, el Tribunal lo que contempla es una protección reforzada ante la subsanación de requisitos que se cumplen previamente pero que no se han hecho valer o se han acreditado de forma irregular, lo que viene garantizado por el texto constitucional y la normativa aplicable es subsanar documentos, pero nunca crear una situación jurídica o de hecho que no existe porque, ya de partida, no se cumplan los requisitos de elegibilidad, sino ante la existencia de un error censal, y añadiendo, que siempre que se trate de un error involuntario e inadvertido.

STC 86/2003, de 8 de mayo:

FJ 5º: *“Que tal exigencia puede ser impuesta como requisito del ejercicio del derecho de sufragio pasivo no presenta dudas, habida cuenta de la naturaleza de derecho de configuración legal que ésta tiene, como se acaba de recordar. Ahora bien, tal exigencia, cuando es dotada de un carácter tan inexorable que no permita su subsanación o cumplimiento alternativo, por fuerza ha de estar muy seriamente fundamentada, desde el punto y hora en que la misma incide de lleno en un derecho tan esencial como es el sufragio pasivo, que hemos descrito, junto con el activo, como “el más importante ejercicio de la soberanía por los ciudadanos” (STC 144/1999, de 22 de julio, FJ 4). En efecto, como hemos dicho, su carácter de derechos de configuración legal, “no nos puede hacer olvidar que los derechos del art. 23 CE y en particular el del 23.2, son derechos fundamentales ... (STC 26/1981, FJ 14).”*

FJ 6º: *“Fácilmente se comprende que tal instrumento resulta esencial para la ordenación del ejercicio del derecho de sufragio activo por parte de los miles o millones de electores en las consultas electorales o referenciadas, de modo que con su simple consulta por los órganos electorales pertinentes el día de la votación, se esté en condiciones de saber de inmediato si quien pretende ejercer su derecho al voto puede*

hacerlo porque reúne los requisitos para ser elector y no se halla privado en ese instante del mismo”

FJ 7º:“Tratándose, sin embargo, del sufragio pasivo, la cuestión aparece notoriamente distinta, pues es obvio que, por muchos que sean los candidatos que pretendan concurrir a las elecciones por los distintos partidos, coaliciones o agrupaciones de electores, las normativas electorales (tanto la del régimen electoral general como la de los regímenes autonómicos) prevén un entramado de órganos administrativo-electorales, entre otras motivos, con el fin de posibilitar un control ad casum de los requisitos que deben reunir aquéllos para poder ser considerados elegibles. Es bien revelador en este sentido que, respecto de la vertiente pasiva del derecho de sufragio, no prevé la Ley Orgánica del régimen electoral general la posibilidad de certificación censal específica antes vista para el ejercicio del sufragio activo. **Ello parece abocar a interpretar como necesariamente equivalente a tal posibilidad la previsión del art. 7.2 de dicho cuerpo legal y sus correlativos en prácticamente todas las legislaciones electorales autonómicas, so pena, en caso contrario, de tener que concluir que el derecho de sufragio pasivo no admite modo de subsanación en el supuesto de error censal inadvertido por su titular, conclusión que aparece de todo punto inadmisibles respecto de un derecho en el que se fundamenta el sistema democrático”**

FJ 8º:“(..)frente a la previsión legal en la Ley Orgánica del régimen electoral general desde su adición por Ley Orgánica 3/1995, de 23 de marzo, de certificaciones censales específicas para acreditar con carácter excepcional su inscripción en el censo electoral quien desee ejercer su derecho al sufragio activo (art. 85.5), no aparece una posibilidad equivalente para quien quiera hacer lo propio con el derecho de sufragio pasivo, de modo que no se vislumbra otra alternativa de subsanación de los fallos de inscripción en el censo que no sea la presentación de documentos que acrediten la posesión de los requisitos de elegibilidad como, en efecto, posibilita el art. 7.2 LOREG.”

SEPTIMO. - LA CONDICION DE INELEGIBILIDAD DE D. ANTONIO CANTÓ DEL MORAL Y DON AGUSTÍN CONDE BAJÉN

D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL, como exponíamos en los hechos de esta demanda, ha sido Coordinador autonómico de la formación política Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Diputado Autonómico de las Cortes Valencianas y portavoz del grupo parlamentario de la misma entidad política, hasta su dimisión el pasado día 17 de marzo de 2021.

Según sus propias declaraciones recogidas en los medios de comunicación, no es hasta después de aquella dimisión que procedió a empadronarse para la búsqueda de trabajo en la Comunidad de Madrid, por tanto, al menos dicho empadronamiento no se ha producido hasta después del 17 de marzo de 2021.

Así, según la documentación que nos dio vista la Junta Electoral Provincial de Madrid, en relación con el DNI de este, en este consta un domicilio en un municipio de la Comunidad de Madrid, pero dicho documento oficial fue (según se recuerda, ya que no se nos dio copia de dicha documentación) expedido entre el 26 y el 29 de marzo de 2021, siendo su fecha de validez, hasta el año 2031.

D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, como exponíamos en los hechos de la demanda, cuenta con una extensa carrera en política y, por ende, con un dilatado currículum en el que se acumulan diferentes cargos electos, todo ellos vinculados a la circunscripción de Toledo, con la que mantiene una intensa actual vinculación política, así como con la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, tal y como aparece en la página web del Partido Popular de esa Comunidad, donde ocupa diversos cargos orgánicos dentro del Partido. El Sr. Conde Bajén ha sido, entre muchos cargos, concejal (entre 1991 y 1999) y alcalde (entre 1995 y 1999) de Toledo, Senador por designación autonómica por la misma circunscripción (entre 1999 y 2011), así como Diputado en la Cámara Baja por la circunscripción de Toledo también (entre 2011 y 2016).

Conforme a lo anterior, no sería, al menos, hasta después de que el Sr. Conde Bajén haya sido contratado como asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, cuya sede se encuentra en Madrid (según las noticias recientemente en enero de 2021, aunque según su nombramiento desde diciembre de 2020), cuando se hubiera producido su empadronamiento en la Comunidad de Madrid;

por lo que, a menos de un mes del cierre censal a 1 de enero de 2021, es muy probable que el cambio de domicilio se hiciera con posterioridad.

Igualmente, según la documentación que nos dio vista la Junta Electoral Provincial de Madrid, en relación al DNI de este, en este consta un domicilio en un municipio de la Comunidad de Madrid, pero dicho documento oficial fue emitido (según se recuerda) el mismo fue expedido entre el 26 y el 29 de marzo de 2021, siendo su fecha de validez, hasta el año 2031.

Por lo anterior, entendemos que ambos, carecen de la condición de electores en la Comunidad de Madrid, derivada de su empadronamiento en un municipio de la Comunidad de Madrid, que les otorga la vecindad administrativa en esta, en una fecha posterior al 1 de enero de 2021; por lo que, no constando estos en el censo electoral vigente, siendo así, y no pudiendo ser electores en la Comunidad de Madrid, carecen de la condición de elegibles en relación al proceso convocado y que se celebrará el 4 de mayo de 2021, sin que se haya acreditado fehacientemente que reunían tal condición con anterioridad al 1 de enero de 2021 para poder ser incluidos en mencionado censo electoral.

En relación al Sr. Cantó, por cuanto diputado electo de las Cortes Valencianas hasta el 17 de marzo de 2021, el mismo debía reunir como tal la condición de elector y elegible en la Comunidad Valenciana, como residente en la misma, dado que, para poder ser electo en dicha circunscripción autonómica, debe reunir la condición de elegibilidad determinada en el artículo 3 de la Ley 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana (LEV), que dispone:

“Artículo 3.

Son elegibles los ciudadanos que, poseyendo la condición de elector, de conformidad con el artículo anterior, no se encuentren incurso en alguna de las causas de inelegibilidad recogidas en las disposiciones comunes del Régimen Electoral General”.

Hilando con este artículo 3, es necesario hacer mención del precepto segundo, apartado primero, de la misma norma, que dice así:

“Artículo 2.

Uno. Son electores los que poseyendo la condición política de valencianos o teniendo los derechos políticos de dicha condición, de acuerdo con el artículo 3 del Estatuto de Autonomía, sean mayores de edad y no carezcan del derecho de sufragio de conformidad con lo previsto en el Régimen Electoral General”.

Por tanto, como no podía ser de otro modo, el Señor Cantó poseía la condición política de valenciano, ejerciendo los derechos políticos de dicha condición, como representante de los valencianos, derivada de su vecindad administrativa en aquella comunidad, conforme al artículo 3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (EACV):

“Artículo 3.

1. A los efectos de este Estatuto, gozan de la condición política de valencianos todos los ciudadanos españoles que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana”.

Siendo así, al menos hasta el 17 de marzo de 2021, el Señor Cantó era vecino y residente de la Comunidad Valenciana, y como tal elector y elegible en la misma, hasta tal punto que era representante público de los electores valencianos en la Cortes Valencianas, y, por tanto, inelegible en otra comunidad autónoma, como refuerza, a sensu contrario, la causa de inelegibilidad del artículo 4 de la LEV, que dispone lo siguiente:

“Artículo 4

Son inelegibles también:

8. Los Parlamentarios de las Asambleas Legislativas de las otras Comunidades Autónomas.”

Siendo a su vez causa de inelegibilidad en la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid prevista en su artículo 3 apartado f, y como deriva directamente de lo dispuesto en el art. 67 de la Constitución Española que declara expresamente: *“1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.”*

Por tanto, si a partir del 17 de marzo desapareció la causa de inelegibilidad derivada de ser diputado autonómico de la Comunidad Valenciana, respecto de la Comunidad de Madrid, también al menos hasta esa fecha, el Señor. Cantó era elector y elegible en la Comunidad Valenciana, derivado de empadronamiento en esta Comunidad, sin que se produjera el cambio, suponemos de empadronamiento, hasta una fecha posterior, y, por tanto, no lo era en la de la Comunidad de Madrid, sino hasta el momento de ese empadronamiento posterior, pues no es posible estar empadronado en dos municipios a la vez.

En consecuencia, el Sr. Cantó no reunía el carácter de elector en la Comunidad de Madrid a fecha del cierre censal, el 1 de enero de 2021, y, sin reunir esta condición no puede ser elegible de cara a las elecciones del 4 de mayo de 2021, por lo que no debe estar incluido en el Censo Electoral vigente.

Y conforme a lo dicho anteriormente, el Sr. Cantó no aparecerá en el censo electoral vigente, ni podría formar parte del mismo, pues su cambio de domicilio y empadronamiento se produce en una fecha posterior al 1 de enero de 2021, por lo que no podría haber sido inscrito por vía del art. 39 de la LOREG de solicitud de rectificación del censo, ni puede ser considerado elegible por la vía del art. 4.2 de la LECM y ni el 7.2 de la LOREG, pues no podría acreditar fehacientemente una vecindad que le hubiera dado derecho a ser elector, que no se produce sino hasta un momento posterior.

En relación al Sr. Cantó no existe error censal que pueda ser salvado por la acreditación especial del artículo 4.2 de la LECM ni el 7.2 de la LOREG, ni se acredita que se tuviera derecho formar parte del censo cerrado a fecha 1 de enero de 2021, puesto que el documento presentado, acredita una vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid con posterioridad a la fecha de cierre censal, lo que por otra parte,

era imposible, puesto que como él ha reconocido ante los medios de comunicación su empadronamiento se ha producido en un momento posterior.

El Sr. Cantó no puede ser considerado vecino madrileño con derechos políticos derivado de una vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid respecto del proceso electoral en curso, pues su vecindad, y, por tanto, el ejercicio de sus derechos políticos correspondía hasta el 1 de enero de 2021 en otra Comunidad Autónoma.

El Sr. Cantó no puede considerarse vecino de Madrid, a fecha del cierre censal, aun cuando tuviera una vivienda en la Comunidad de Madrid, aunque residiera temporadas en esta, aunque haya trabajado en Madrid, o tenga vínculos familiares o afectivos en la Comunidad de Madrid, algo que no se ha acreditado en este procedimiento de proclamación de candidaturas, puesto que, como se ha dicho, la vecindad administrativa deriva del empadronamiento en la Comunidad de Madrid, derivado de una residencia actual y la mayor parte del año en esta, algo que nunca se ha podido producir siendo vecino de otra comunidad hasta al menos el 17 de marzo de 2021, siendo Diputado Autonómico, residiendo y estando empadronado en la Comunidad Valenciana.

En relación al Sr. Conde Bajen, según se ha acreditado, consta una vinculación y residencia en la provincia de Toledo constante y permanente, al menos hasta el mes de diciembre de 2020 o enero de 2021, en que es contratado por el Grupo de Cortes Generales del Partido Popular.

Por tanto, siendo así, al menos hasta el mes de diciembre de 2020 o enero de 2021, todo hacer presuponer que el Señor Conde Bajen era vecino y residente de la Comunidad de Castilla la Mancha, y como tal elector y elegible en la misma, hasta tal punto que había sido representante público de los electores Castellano Manchegos en numerosas ocasiones.

No sería, hasta una fecha que desconocemos, en que se haya producido un empadronamiento en la Comunidad de Madrid, dando lugar a un cambio de empadronamiento, si se ha producido, respecto de la Comunidad de Castilla la Mancha,

que se adquirió por este la condición de elector y de elegible, en ese momento posterior, pues no es posible estar empadronado en dos municipios a la vez.

En consecuencia, siendo así, el Sr. Conde Bajén, entendiéndose que con mucha probabilidad que no se ha producido el empadronamiento en fecha anterior al 1 de enero, este no reunía el carácter de elector en la Comunidad de Madrid a fecha del cierre censal, el 1 de enero de 2021, y, sin reunir esta condición no puede ser elegible de cara a las elecciones del 4 de mayo de 2021, por lo que no debe estar incluido en el Censo Electoral vigente.

Y conforme a lo dicho anteriormente, en el mismo caso que el Sr. Cantó, el Sr. Conde Bajén no aparecerá en el censo electoral vigente, ni podría formar parte del mismo, pues su cambio de domicilio y empadronamiento se produce en una fecha posterior al 1 de enero de 2021, por lo que no podría haber sido inscrito por vía del art. 39 de la LOREG de solicitud de rectificación del censo, ni puede ser considerado elegible por la vía del art. 4.2 de la LECM y ni el 7.2 de la LOREG, pues no podría acreditar fehacientemente una vecindad que le hubiera dado derecho a ser elector, que no se produce sino hasta un momento posterior.

En relación al Sr. Conde tampoco existe error censal que pueda ser salvado por la acreditación especial del artículo 4.2 de la LECM ni el 7.2 de la LOREG, ni en el expediente, al menos con los documentos de los que tenemos constancia, no se ha acreditado que se tuviera derecho formar parte del censo cerrado a fecha 1 de enero de 2021, puesto que igualmente el documento presentado, acredita una vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid con posterioridad a la fecha de cierre censal.

El Sr. Conde, por ello, no podría ser considerado vecino madrileño con derechos políticos derivados de una vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid respecto del proceso electoral en curso, pues su vecindad, y por tanto, el ejercicio de sus derechos políticos estaba al menos hasta el 1 de enero de 2021 en otra Comunidad Autónoma.

El Sr. Conde no puede considerarse vecino de Madrid, a fecha del cierre censal, aun cuando tuviera una vivienda en la Comunidad de Madrid, aunque residiera temporadas en esta, aunque en otros momentos anteriores hubiera trabajado en Madrid, o incluso en diciembre ya estuviera, o tenga vínculos familiares o afectivos en la Comunidad de Madrid, algo que no se ha acreditado en este procedimiento de proclamación de candidaturas, puesto que, como se ha dicho, la vecindad administrativa deriva del empadronamiento en la Comunidad de Madrid, derivado de una residencia actual y la mayor parte del año en esta, algo que nunca se ha podido producir siendo vecino de otra comunidad hasta al menos hasta diciembre de 2020 o enero de 2021.

Y si, como se acreditará, ni el Sr. CANTÓ ni el Sr. CONDE estaban empadronados antes del 1 de enero de 2021, era porque no podían, porque estaban empadronados en otros municipios, en otra circunscripción y otra Comunidad distinta a la Comunidad Autónoma de Madrid, y no podían estar en dos municipios a la vez. Y si, podían haber cambiado de empadronamiento con anterioridad, entendiéndose que concurrían las circunstancias para ello, de tratarse la residencia principal en la Comunidad de Madrid, estos han sido los únicos responsables de que esta circunstancia no se haya producido, no existe error censal ni error de la administración que corregir.

A mayor abundamiento, siendo responsabilidad de estos, también del Partido Popular, que integra a los dos candidatos, conocedor de la legislación electoral como formación política concurrente a los procesos electorales en nuestro país, que es consciente de la necesidad de este empadronamiento con carácter previo al cierre censal, como el resto de las formaciones políticas, que concurrimos en igualdad de condiciones. Y así, incluso ha quedado recogido por los medios de comunicación, que señalan que el PP avisó hace tres meses que el candidato CANTÓ debía empadronarse en Madrid:

- El PP avisó hace tres meses a Toni Cantó de que debía empadronarse en Madrid. El Confidencial Digital: <https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/pp-aviso-hace-meses-toni-canto-debia-empadronarse-madrid/20210325170625226623.html>

OCTAVO.- SOBRE LA NULIDAD, CONFORME AL ARTÍCULO 47 Y 48 DE LA LEY 39/2015, DEL ACUERDO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LA PROCLAMACIÓN DE LA CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR, EN CUANTO A LA INCLUSIÓN DE LOS CANDIDATOS CANTÓ Y CONDE BAJÉN, INELEGIBLES, POR VULNERAR LA NORMATIVA ELECTORAL, EL ART. 23, 14 Y. 9.1 Y 3 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, Y, LA FALTA DE MOTIVACIÓN DE SU ACUERDO, CONFORME AL ART. 35 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Con absoluto respecto a la actuación del criterio seguido por la Junta Electoral Provincial, sin embargo, entendemos que su resolución proclamando la candidatura del Partido Popular, publicado el 8 de abril en el BOCM, considerando elegibles a los candidatos CANTÓ y CONDE BAJÉN, debe ser considerada nula.

En primer lugar, porque, conforme a lo expuesto, la consideración de estos como elegibles, vulnera el derecho fundamental previsto en el art. 23 de la Constitución Española, tanto en su apartado primero como en su apartado segundo.

Respecto del apartado primero, puesto que con la inclusión de los candidatos que debieran ser considerados inelegibles, se vulnera el derecho de los ciudadanos a participar a través de sus representantes, puesto que, como tal derecho de configuración legal, estos representantes son los que deban serlo conforme dispone nuestro ordenamiento jurídico, de tal manera, que su inclusión, en defecto de aquellos que debieran serlo conforme al mismo impide la elección de los representantes a los ciudadanos como parte de su derecho a la participación política.

Respecto del apartado segundo, puesto que con la inclusión de los candidatos que debieran ser considerados inelegibles, se vulnera el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, consecuencia de una aplicación errónea de la normativa electoral, que, en virtud de este principio de igualdad derivada de la aplicación de la ley priva a los ciudadanos de participar en un proceso electoral sino se reúnen las condiciones de elector y elegible.

En este sentido, como organización política concurrente al proceso electoral, con candidatura proclamada, la inclusión de los candidatos que debieran ser considerados inelegibles de otra formación política, vulnera nuestros derechos y de nuestros candidatos reconocidos en el art. 23 de la Constitución Española, pues se permite el derecho a participar en un proceso electoral a quien no debiera, así como se le permite acceder a un cargo público a quien no debiera en las condiciones de igualdad que impone la ley, alterando con ellos proceso electoral en perjuicio del resto de formaciones políticas concurrentes, que se han ajustado a lo dispuesto en la ley electoral.

La jurisprudencia constitucional citada, también en el caso del art. 23 de la CE señala que se debe realizar una interpretación del ordenamiento jurídico en el sentido más favorable al ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales, y más en los procesos electorales, esenciales en nuestro orden democrático, pero siempre que esa interpretación sea respetuosa con la legislación electoral, pues como indicábamos también ha señalado el Tribunal Constitucional, *“los derechos de participación reconocidos en el art. 23 CE han de ejercerse en el marco establecido por la LOREG, que los desarrolla y concreta, de modo que los límites establecidos en ella no pueden enervarse ni alterarse por la vía de la interpretación más favorable al derecho fundamental”* (STC 74/1995, de 12 de mayo).

Igualmente, y derivado de la no aplicación de la ley en condiciones de igualdad, especialmente la electoral, se vulnera el artículo 14 de la Constitución Española que consagra el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley.

Regular el acceso a la participación política, elegir y ser elegido, como prescribe el artículo 23 CE, no es una limitación a los derechos de participación política, sino una garantía a que todo ciudadano acceda en condiciones de igualdad mediante unos requisitos que puedan ser aplicables para todos con criterios de imparcialidad. Unas reglas preestablecidas que todo ciudadano conozca previamente a ejercer su derecho, para que éste no pueda ser alterado arbitrariamente.

Por el contrario, la inclusión en las candidaturas de quien no cumple los requisitos vulnera el derecho de esta formación política, del resto las formaciones concurrentes, y del resto de candidatos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos con los requisitos que señalen las leyes, así como el principio de igualdad de oportunidades en los procesos electorales, conforme al art. 23 y 14 de la CE.

Y así, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en casos como la STC 86/2003, de 8 de mayo de 2003, donde indicaba sobre la necesidad de inscripción en el censo electoral al afirmar que “solamente si el legislador impone requisitos que vulneren el contenido esencial de dicho derecho, resultarían éstos inconstitucionales ex art. 53.1 CE, lo que no parece que ocurra precisamente con la exigencia de la inscripción en el censo, que este Tribunal ha considerado esencial” y ha admitido que el legislador autonómico exija garantías previas al acceso a la participación política en condiciones de igualdad, al indicar que “nada obsta para que, en principio, y en tanto no suponga vulneración del contenido esencial del derecho a ser elegido tal y como antes se señalaba, añada la legislación autonómica otros requisitos para el ejercicio de dichos derechos,” por lo que ha concluido que “cabe inferir la posibilidad de exigencia de inscripción en el censo electoral a quienes pretendan formar parte de dichos cuerpos legislativos,” que no es sino lo que venimos exigiendo que se cumpla en el presente caso.

En el mismo sentido la STC 73/1987, de 23 de mayo de 1987, que establece que “quienes sean propuestos como candidatos habrán de acreditar, en el acto mismo de la presentación, su correspondiente inscripción censal.” O la propia STC 154/1988, de 21 de julio, que indica que “sólo tendrán la condición de electores, y podrán ser elegibles, los ciudadanos que figuren inscritos en el censo [...] requisito indispensable para el ejercicio del derecho de sufragio” y que “Dada la relevancia de la inscripción censal en el ejercicio del derecho fundamental de sufragio, el censo se convierte así en un instrumento indispensable para dicho ejercicio.”

La exigencia de vecindad administrativa a fecha del cierre censal, es acorde con lo que indicaba el TC en su Sentencia 60/1987 de cara a “procurar una cierta homogeneidad de intereses en el ámbito de la Comunidad Autónoma entre el Cuerpo

Electoral y aquellos que ante él se proponen como candidatos”, y por otro lado, es una exigencia acorde con el art. 23 de la CE pues solo aquellos que son electores y elegibles conforman cuerpo electoral, sujeto de derechos y de obligaciones en ese concreto proceso electoral. A sensu contrario, entender que ello no es así, además de ir contra del derecho fundamental del art. 23 de la CE, supone la ruptura de los principios básicos de todo proceso electoral, al vulnerar la igualdad entre los participantes y, la quiebra del cuerpo electoral, y el sentido del proceso mismo, y es que **aquellos que eligen voten de entre ellos a quien los representen, pues representan y comparten los intereses colectivos de aquellos**; algo que conforme a un respeto exigente del proceso democrático no cabría ni plantearse.

Derivado de esta vulneración de los derechos fundamentales constitucionales mencionados, igualmente se vulnera el principio constitucional previsto en el art. 9 de la CE, en cuanto al sometimiento de todos los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, así como, el principio de legalidad, jerarquía normativa, y seguridad jurídica, e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, mediante la decisión que entendemos contraria a las normas expuestas y la interpretación de que de estas han hecho los tribunales, y especialmente el Tribunal Constitucional.

No podemos pasar por alto que los miembros de la Junta Electoral Provincial no son personas legas en derecho, sino jueces, y que sus resoluciones, si bien no se deben estrictamente al contenido del artículo 120.3 de la Constitución por no tratarse de sentencias, sí que deben ser inspirados por este artículo 120.3 Constitución. Por ello, y especialmente, entendemos que se vulnera el principio de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad, en cuanto a la proclamación de la candidatura recurrida, y las resoluciones en las que se basan, han sido adoptadas, vulnerando lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la que también está sujeta la Junta Electoral Provincial, en relación a la necesidad de la motivación de sus actos administrativos, que han limitado los intereses legítimos de esta parte en relación a la denuncia planteada de la candidatura del Partido Popular, más aun estando en juego derechos fundamentales. Por lo tanto, los motivos de acceso o impedimento al derecho fundamental del artículo 23 CE, tienen que estar exquisitamente motivados para alejar a la Administración de toda duda de arbitrariedad, artículo 9.3 CE.

Se limita la Junta a decir que se le dio trámite de subsanación al Partido Popular y que esta se llevó a efecto en tiempo y forma, por lo que proclama la candidatura. Sin embargo, no sólo no ha entrado a valorar nuestros argumentos, sino que tampoco se nos dio traslado de la subsanación, ni se argumentaba de ninguna prueba que acreditara que estamos en un error, que motivó nuestro escrito del 5 de abril y el siguiente acuerdo N.º 17 de la misma.

Y ello por cuanto, cuando de conformidad con lo dispuesto en el art. 47.2 de la LOREG esta parte presentó su denuncia fundada y razonada sobre la creencia de la inelegibilidad de los candidatos indicados derivada de entender que estos carecían de su condición de electores a consecuencia de un cambio de domicilio desde otra comunidad autónoma posterior a la fecha del cierre censal; por el contrario, toda la argumentación recibida ha sido que se comprobaron en los documentos de identidad recibidos de las candidatos la existencia de un domicilio en la Comunidad de Madrid.

Con respeto absoluto a la actuación de la Junta, en las resoluciones dictadas por la Junta Electoral Provincial nada se alega sobre la debida comprobación respecto de los candidatos cuestionados en el censo electoral; este extremo, que esta parte no puede verificar no nos consta porque no se nos ha comunicado, ni se nos ha dado documento alguno que así lo acredite que forme parte del expediente administrativo, y desconocemos si se ha solicitado a oficina del censo electoral pronunciarse sobre si formaban parte del mismo y desde cuándo.

Una vez presentada nuestra denuncia contra la candidatura proclamada provisionalmente del Partido Popular conforme al art. 47.2 de la LOREG, nos encontramos igualmente en una situación de indefensión pues no conocemos a través de las resoluciones de la Junta Electoral Provincial, ni se nos han trasladado las posibles alegaciones del Partido Popular, sobre estos extremos, o razones o motivos que subsanaran los defectos alegados.

Tan sólo se nos dio acceso a la vista de la Resolución de 3 de abril de 2021 de subsanación de la candidatura del Partido Popular, en la que no se hacía mención

alguna a la denuncia planteada ni se exigía acreditación de la condición de electores y elegibles denunciada respecto de los candidatos CANTÓ y CONDE, sino que la misma tan sólo hacía referencia a la necesidad de acreditación de la certificación censal o de empadronamiento a otra candidata de la misma, la número 15, porque en su DNI no figuraba un domicilio en la Comunidad de Madrid.

Deducimos del acuerdo N.º 17 de la Junta Electoral de Madrid, que para esta basta acreditar un domicilio en Madrid en un documento oficial para considerar a los candidatos electores y elegibles, independientemente desde cuando este documento se haya expedido, e independientemente desde cuando ese domicilio haya dado a un empadronamiento en la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, conforme a toda la legislación expuesta, argumentaciones e interpretaciones constitucionales del derecho de sufragio pasivo ligado al derecho al sufragio activo, al censo electoral y al cierre del mismo, entendemos que este razonamiento no se ajusta a derecho.

No dudamos que la Junta Electoral, y creemos que así ha sido, por lo que no existe nada que reprochar en este sentido, que haya seguido este criterio de forma igualitaria con todas las formaciones políticas y con todos los candidatos, pero, con respeto a su criterio, entendemos que no es un criterio ajustado a derecho, pues vulnera todas las disposiciones legales indicadas y el principio de igualdad ante la ley que es la que determina las condiciones para ser elegible.

Cuanto menos, que denunciada por nuestra parte el carácter de inelegibles, desde la Junta Electoral Provincial se debiera haber solicitado la acreditación censal a los candidatos, o, conforme a lo que dispone el art. 4.2 de la LECM y el 7.2 de la LOREG una acreditación fehaciente de tener derecho a estar incluidos en dicho censo, aunque no lo estuvieran, por reunir los requisitos para ello, esto es, una vecindad administrativa por empadronamiento anterior al 1 de enero de 2021.

Y más aún, era exigible esta comprobación, cuando precisamente, a aquellos candidatos que no tenían domicilio en Madrid en su DNI se les exigía precisamente esta acreditación.

La actuación por parte de la Junta, con el debido respeto, nos está dejando en una situación de manifiesta indefensión, no sólo en vía de denuncia de otra candidatura, sino en vía de recursos como el que ahora se presenta, pues no podemos, con carácter previo, por nosotros mismos acceder a todos los elementos necesarios para acreditar que los candidatos no reunían la condición de elector y elegible a 1 de enero de 2021, pues no estaban en manos de esta parte sino de la Junta Electoral Provincial solicitarlos.

A mayor abundamiento, tras nuestra denuncia, nuestras alegaciones, para responderlas y despejar toda duda sobre el carácter de elegibles de los candidatos cuestionados, comprobado que los DNI presentados por los candidatos (salvo error de esta parte al comprobarlo ya que no se le facilitó copia de los mismo) habían sido recientemente expedidos, en el mes de marzo de este año 2021, después de convocado el proceso electoral, debiera haberse solicitado a aquellos otra acreditación fehaciente de su empadronamiento en la comunidad de Madrid y el momento en que este se había producido.

Y ello, porque el domicilio que consta en los DNI no tiene ningún efecto a los efectos de la vecindad administrativa, conforme a lo dispuesto en la LBRL que la establece. Es cierto que para cambiar un domicilio que consta en un DNI es necesario acreditar un empadronamiento actual, pero durante todo el tiempo de vigencia del mismo, que de ordinario son 10 años, no acredita el empadronamiento posterior, pues se puede cambiar en ese tiempo de domicilio y empadronamiento y no de DNI.

Y, es cierto que, para cambiar el domicilio del DNI, como les debió ocurrir a los Sres. Cantó y Conde, se debe acreditar un empadronamiento en el mismo, pero esto sólo acredita que, en el momento de la expedición, en ese momento, que entendemos ha sido marzo de 2021, se había producido un empadronamiento en la Comunidad Madrid, pero de ninguna forma acredita que este se hubiera producido con anterioridad.

Y ello, pues así lo dispone el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica (BOE núm. 307, de 24 de diciembre), en su artículo 5, respecto de los requisitos para la expedición:

“Artículo 5. Requisitos para la expedición.

1. *Para solicitar la expedición del Documento Nacional de Identidad será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya de expedir, el abono de la tasa legalmente establecida en cada momento y la presentación de los siguientes documentos:*

- a) *Certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente. A estos efectos únicamente serán admitidas las certificaciones expedidas con una antelación máxima de seis meses a la fecha de presentación de la solicitud de expedición del Documento Nacional de Identidad y que contengan la anotación de que se ha emitido a los solos efectos de la obtención de este documento. (Modificada por el Real Decreto 1586/2009, de 16 de octubre).*
- b) *Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. (Modificada por el Real Decreto 1586/2009, de 16 de octubre).*
- c) ***Certificado o volante de empadronamiento del Ayuntamiento donde el solicitante tenga su domicilio, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud del documento nacional de identidad.***
- d) *Los españoles residentes en el extranjero acreditarán el domicilio mediante certificación de la Representación Diplomática o Consular donde estén inscritos como residentes.*

En consecuencia, se pueden aportar certificaciones de empadronamiento expedidas hasta tres meses antes, lo que no impide presentar una certificación obtenida, un día antes de su expedición.

Es decir, un DNI expedido en marzo de 2021, con vigencia hasta marzo de 2031, no acredita fehacientemente de ninguna manera que el domicilio que consta en el mismo sea el que el titular tenía de empadronamiento a 1 de enero de 2021, fecha en la que se debía acreditar el mismo para ser elector y elegible y formar parte del censo electoral para las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid de 4 de mayo de 2020, y por tanto, para no incurrir en causa de inelegibilidad por ello.

Por todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO que tenga por presentado este escrito, lo admita a trámite, y tenga por interpuesto en tiempo y forma **RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO** contra la proclamación de la candidatura del Partido Popular para las Elecciones a la Asamblea de Madrid del próximo día 4 de mayo de 2021, publicada en el BOCM de la 8 de abril, en base a lo acordado por la Junta Electoral Provincial de Madrid en sus Acuerdos N.º 16 de 5 de abril de 2021 y N.º 17 de 6 de abril, y, en su virtud, dicte **Sentencia por la que se anule dicho acuerdo, y, se declare la exclusión de dicha lista electoral de D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL Y A D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN** por concurrir en estos causa de inelegibilidad para su proclamación como candidato a las Elecciones a la Asamblea de Madrid, con las consecuencias que de ello deriven.

OTROSÍ DIGO: debido a los cortos plazos para resolver las demandas electorales, solicitamos como **DILIGENCIAS DE PRUEBA URGENTES:**

1. Se solicite a la Oficina del censo electoral certificado sobre la inclusión o no de **D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL Y DE D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN**, en el censo electoral cerrado a 1 de enero de 2021, para el proceso electoral de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que se celebrará el 4 de mayo de 2021.

2. Se solicite al Instituto Nacional de Estadística certificado sobre donde constan empadronados y desde cuando **D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL Y D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN**.
3. Se proceda a solicitar a los municipios donde aparecen domiciliados en sus DNI **D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL Y DE D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN** a fin de constatar desde qué fecha figuran empadronados en la Comunidad de Madrid.
4. Se requiera a la Junta Electoral Provincial de Madrid para que aporte a los Autos el expediente administrativo completo de nuestra denuncia frente a la candidatura del PP a la Asamblea de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de 2021, la documentación obrante sobre la candidatura del PP proclamada, los Acuerdos adoptados, respecto a nuestra denuncia y la candidatura, y los documentos aportados por los candidatos cuestionados **D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL Y DE D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN**.
5. Sin perjuicio, de los anteriores, se proceda a la averiguación domiciliaria de **D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL Y DE D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN** a través del Punto Neutro Judicial a fin de constatar desde qué fecha figuran empadronados en la CAM.

AL JUZGADO SUPPLICO admita la práctica de las diligencias de prueba con carácter urgente para la más clara administración de Justicia.

Es Justicia que pido en Madrid, a nueve de abril de dos mil veintiuno.